



Imagen: Agencia guatemalteca de noticias

Cesarismo progre, la revolución pasiva

Progressive Caesarism, the passive revolution

Recibido: 24/2/2025

Aceptado: 25/2/2025

Publicado: 3/3/2025

Cristhians Castillo Folgar

Licenciado en Relaciones Internacionales de la USAC. Encargado del Área Sociopolítica del IPNUSAC. Premio a la Excelencia Académica como Investigador 2024.

Correo: crisma0622@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-1367-1008>

Resumen

No basta con afirmar que un gobierno es social democrata, también debe parecerlo con sus actos. El autor, a la luz de la teoría analiza las tendencias de refuncionalización del régimen tradicional de poder en Guatemala que ha seguido la administración Arévalo de León y que evita asumir el ideario que motivó la revolución ciudadana de 2015 que reinauguró la primavera democrática de la cual se valió el partido Movimiento Semilla para llegar al poder. ¿A quién le sirve el gobierno progre de Bernardo Arévalo? Si solamente se limita a gobernar inercialmente.

Palabra clave:

Cesarismo progresivo, revolución pasiva, transformismo, restauración progresista, utopía.

Abstract

It is not enough to affirm that a government is social democratic, it must also appear to be so through its actions. The author, in the light of theory, analyzes the tendencies of refunctionalization of the traditional regime of power in Guatemala that the Arévalo de León administration has followed and that avoids assuming the ideology that motivated the citizen revolution of 2015 that reopened the democratic springtime that the Seed Movement party used to come to power. Who does the pro-green government of Bernardo Arévalo serve? If it only limits itself to govern inertially. It is not enough for a regime to say that it is social democratic, it must also appear to be so by its actions. In light of the theory, the author analyzes the tendencies of refunctionalization of the traditional regime of power in Guatemala followed by the Arévalo de León administration, which avoids assuming the ideology that motivated the citizen revolution of 2015, which reopened the democratic spring that the Movimiento Semilla party used to come to power. Who does the pro-green government of Bernardo Arévalo serve? If it only limits itself to govern inertially.

Keywords:

Progressive caesarism, passive revolution, transformism, progressive restoration, utopia.

El proyecto histórico y el pensamiento arevalista

Para gobernar, se debe tener una idea clara de que país se desea construir. Para el que no sabe a dónde ir, cualquier destino parece bueno.

En la base de todo gobierno debe haber una utopía (sea pública o privada), que orienta el actuar del gobernante, quien, a su vez, lidera a las fuerzas sociales hacia la visión que irradia con tanta pasión, que convence a quienes le siguen en campaña electoral. También persuade a sus equipos durante el gobierno y, en algunos casos, hasta lograr la propagación de su pensamiento en el pueblo que vota y que lo avala durante el ejercicio del poder. A eso le llaman ideología, ese ideario que orienta en medio de la adversidad política, que anima a los correligionarios cuando la oposición se fortalece; orienta más allá de los intereses mezquinos de quienes ven en el poder un objetivo en sí mismo, sin identificar el valor instrumental que posee para incidir en la vida de grandes colectivos humanos.

La familia Arévalo ha marcado la historia política de Guatemala. No es una de esas estirpes aventureras en búsqueda de fama y fortuna, a partir de los recursos del Estado. En momentos críticos, a sus integrantes les ha tocado asumir el mando y la conducción del país para un propósito de estabilidad o de transformación social.

Juan José Arévalo Bermejo gobernó el país luego de la renuncia del dictador Jorge Ubico que por 13 años gobernó tiránicamente el país y el sucesor del ubiquismo, Ponce Vaides, fue vencido en las calles por movimientos populares de rechazo a la continuación del despotismo. Setenta y nueve (79) años después, a Cesar Bernardo Arévalo de León le toca encabezar una fuerza electoral de rechazo a la corrupción en una gesta que comenzó en 2015 y luego de dos gobiernos conservadores sin ánimo de atender los problemas de fondo, terminó votando por él en 2023. La promesa de frenar la corrupción provocó que los votantes guatemaltecos buscaran una opción transformadora, lejos de que el ahora presidente fuera a buscar a los

electores. Arévalo Bermejo orientó el Estado hacia la estabilidad y la transformación social. Su hijo enfrenta el desafío de lograr un nuevo pacto nacional para la conducción de país. Ambos llegaron al poder en momentos determinantes para la historia político-nacional. El primero con las ideas claras y el segundo sin experiencia de gobierno, sin utopía.

En momentos críticos de polarización ideológica «Juan José Arévalo se definió como un socialista espiritual e impulsó reformas para integrar a las clases más pobres de la sociedad, basado en el New Deal del presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt» (Ramírez, 2015). Ocho décadas después, su hijo en un vehículo electoral autodenominado social demócrata, es visto como un presidente progresista que, junto con Álvaro Colom electo por la Unidad Nacional de la Esperanza, han sido los dos únicos partidos de izquierda que han ganado la presidencia para atender «prioritariamente» las profundas brechas sociales que sostienen el subdesarrollo nacional.

Gobernar un país conservador desde una visión de izquierda, exige que las ideas estén muy claras y que el compromiso con los más desposeídos y las clases subalternas sea el orientador no sólo de las políticas públicas, sino además sea la columna axiológica del equipo de gobierno. El fin es no perderse en el intento de atender la problemática cotidiana y olvidar por completo la visión estratégica, la utopía.

Ahora, cuando reflexiono a un año de gobierno, no termina que quedarme claro cuál es el proyecto histórico del presidente Bernardo Arévalo. Por la evidencia empírica, pareciera que se prestó a imponer un cesarismo progresivo que refuncionaliza la estructura económica, política y social de la cual todos sus predecesores han sido, de una u otra forma, los cancerberos del estatus quo.

Siguiendo a Antonio Gramsci y su planteamiento de la revolución pasiva, la tendencia del segundo gobierno arevalista pinta para que se constituya en un desmovilizador de la energía ciudadana que exigió en 2015 el cambio de la clase política. En 2023 se reafirmó que el sistema requiere una cirugía profunda que

debe iniciar con la reforma política; la independencia judicial (que requiere reforma constitucional); un pacto ambiental; la reforma profunda del modelo de gestión pública y la sostenibilidad fiscal. Esta es la utopía que no aparece por ningún lado en las prioridades del presidente César Bernardo Arévalo que mata las esperanzas de modernización del Estado y gobierna bajo los principios del gatopardismo latinoamericano.

Cesarismo progresivo y la pasivización popular

No solo es sólo una metáfora que empata con el nombre del presidente. Es la categoría que Gramsci emplea para referirse a los regímenes que han instrumentalizado la energía social rebelde y la indignación popular contra el sistema imperante y, una vez que llegan al poder, se justifican tras una reforma progresiva que evita la salida revolucionaria (que atiende las raíces del problema) y aceptan y conviven con el estado de situación que ofrecían transformar.

Para el caso que nos ocupa, hasta la lucha contra la corrupción ahora se presenta como gradual. Las denuncias por los casos de corrupción del gobierno anterior no han avanzado y las destituciones de funcionarios públicos vinculados a ellas se han tornado en denuncias mediáticas, con seguimientos burocráticos lentos, que dan como resultado el mantenimiento de las estructuras operativas que vienen de gobiernos anteriores en los ministerios y oficinas públicas, en las cuales se operativizan las tramas de corrupción. Esta, ahora se expresa en la parálisis de los principales negocios con el Estado (infraestructura, medicamentos y equipamiento) que debieran responder oportunamente a las necesidades más sentidas de la población. Pero los discursos presidenciales, siguen siendo con narrativas sostenidas en verbos conjugados a futuro.

La llegada al poder de Cesar Bernardo Arévalo desmovilizó la lucha social en los frentes tradicionales que, de manera intermitente, planteaban reivindicaciones históricas asociadas a brechas sociales. Entre los reclamos hay que destacar: al acceso a la tierra (movimiento campesino); el

reconocimiento de los derechos de pueblos originarios (autoridades ancestrales, Ongs, organizaciones de base); la defensa de los derechos humanos (defensores de derechos humanos); reivindicaciones de minorías (movimiento LGTBQ+; colectivos urbanos; movimiento estudiantil; feministas; colectivos de artistas; pastoral social, entre otros) que interpelaban al modelo económico y al sistema político exigiendo respuestas del Estado. Todas esas voces se apaciguaron con la promesa de la lucha contra la corrupción. Luego de las elecciones generales, se empeñaron en consolidar una entente que defendiera la democracia de la intentona de desconocer los resultados electorales de la primera vuelta de votaciones del 2023. Esta defensa condujo a enfrentar a un oponente aglutinado en el *giammaterismo* que pretendía no salir expulsado del control gubernamental y del modelo de gestión pública de control total.

Los liderazgos más consolidados como la Junta Directiva de los 48 cantones recurrieron a medidas de hecho para demandar la renuncia de la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta, después del secuestro de las actas electorales 4 y 8 (La Hora, 2023) con el objetivo presunto de alterar los binomios que pasaban a segunda vuelta. Ante esta presión, hubo una serie de expresiones sociales que se sumaron a la toma del espacio público que duró un mes y cuatro días. Durante ese período no se concretaron las demandas de las organizaciones sociales, pero el país se paralizó debido a las consecuencias de los bloqueos de vías públicas y las protestas estériles.

Posteriormente, la lucha se centró en viabilizar y «blindar» la transición de mando y garantizar que el binomio presidencial tomara posesión de los cargos, sin una ruptura constitucional promovida por el capricho de algunos exdiputados que pretendían alterar las formas constitucionales expresadas en la ceremonia de juramentación. Pero, ¿qué pasó tras la toma de posesión con la energía social tan beligerante durante el octubre de 2023? ¿Se han satisfecho las expectativas ciudadanas de combate a la corrupción? ¿Se han transformado las deprimidas condiciones sociales en las que subsisten las bases de estas organizaciones, principalmente en otros departamentos distintos que

no se encuentran en la región metropolitana del país? La respuesta es no a todas las interrogantes. Si bien César Bernardo Arévalo no es un líder carismático que mueva masas, ni siquiera para encabezar el llamado nacional a la destitución de la fiscal general, sí representa un imaginario de lucha social abanderado por el legado de su padre y el respaldo internacional que se manifestó fuertemente durante el periodo de transición de gobierno.

Se esperaba mayor determinación del presidente Arévalo, recién juramentado, para encabezar la demanda ciudadana de renuncia de la fiscal general, fiscales y operadores de justicia. También que denunciara de manera vehemente los escándalos de corrupción perpetrados por su antecesor, hechos que cohesionaron a los sectores sociales inconformes, que además respaldarían las acciones ejemplares que adoptara con manifestaciones de calle, ni lo uno ni otro sucedió. Por el contrario, sus estrategias de «ajedrez» (metáfora satírica de sus acciones de gobierno), han dejado en claro que prefiere una estrategia secuencial de cambios leves y diferidos en el tiempo que no entren en contradicción con el statu quo.

Con su estilo de gobierno, su parsimoniosa personalidad y su diplomática narrativa, Arévalo ha desmovilizado la energía social. Adormeció la indignación con el espejismo del combate a la corrupción y ha capitalizado aliados internacionales con el pretexto de la defensa de la institucionalidad democrática que, lejos de estar en peligro, sigue reproduciendo viejas prácticas perversas de subrepresentación, olvido, clientelismo e instrumentalización de los mismos excluidos de siempre.

La pasivización de los sectores populares es producto de una confluencia de diversas fuerzas progresistas, movimientos sociales y populares, organizaciones de base y Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), tanto en la conformación del Partido Movimiento Semilla, como en las acciones de calle, movilizaciones pacíficas y respaldo ciudadano a la toma de posesión de un actor político

que ha demostrado que no tiene arraigo en las luchas populares, pero que aún representa una mínima oportunidad de proyectar sus demandas y luchas históricas hacia las políticas públicas y el énfasis en la gestión gubernamental con enfoque social.

El «César» Arévalo, pertenece a la vanguardia de la izquierda. Es de los cuadros cultos y bien formados. Heredero de un apellido que, como los de la élite económica, deslumbran a la plebe, que les tolera casi cualquier cosa, porque son descendientes de Tonatiuh. Sólo así se puede entender el letargo de las voces estridentes que saben hacer oposición a los gobiernos conservadores, opresores y clasistas de derecha, pero que durante el primer año de gobierno arevalista han permanecido calladas en la crítica, se autocensuran a la hora de adversar la pasividad del gobierno y no han osado promover una narrativa que dañe la reputación del ejecutivo que sigue siendo víctima de los embates del *giammaterismo*.

«El cesarismo progresivo cumple una función fundamental en la medida en que no solamente equilibra y estabiliza el conflicto, sino que establece la verticalidad, la delegación y la pasividad como características centrales» (Quevedo, 2019) de su administración, pasivizando a los sujetos colectivos.

Los sindicatos guatemaltecos requieren un tratamiento particularizado, puesto que aunque pueden confluir con luchas populares, su principal objetivo es la negociación leonina de beneficios de sus miembros y, predominantemente les conviene una negociación particularizada, que precede a medidas de hecho sostenidas por recursos propios; de esa cuenta el movimiento magisterial se encuentra latente debido a la negociación de su pacto colectivo y recién para febrero de 2025 se ha convocado a la primera manifestación pública del sindicato rojo (trabajadores de la salud) que mediante bloqueos en puntos estratégicos de país, pretenderían obligar a la titular del Ministerio de Salud a negociar su pliego de peticiones, lo cual lograron sin siquiera salir a las calles.

A pesar de que las promesas de campaña no se han concretado y tampoco hay avances significativos en la transformación de las condiciones estructurales del modelo económico y el sistema de gobierno, aún hay una apuesta por el beneficio de la duda de los sectores populares, respecto de lo que pueda concretar «la nueva primavera».

Transformismo y revolución pasiva

El Movimiento Semilla se benefició de la herencia de La Plaza de 2015. Sin embargo, no capitalizó el apoyo popular para promover la ruta de transformación profunda del Estado en los inicios del periodo legislativo y del periodo de gobierno actual. En aquel momento aún contaban con todo el respaldo popular, que no era necesariamente sinónimo del apoyo electoral que obtuvo en primera vuelta. Ni las demandas más urgentes luego del **#RenunciaYa** han atendido con sentido de urgencia, concretamente la reforma político-electoral que fue el primer nivel de transformación que demandó la consigna del **#ReformasYa**. Para más, James Ernesto Morales Cabrera promovió lo que denominó las reformas de segunda generación, luego de aprobadas en los inicios de la octava legislatura, las reformas a la Ley Electoral mediante el Decreto número 26-2016.

El sentido de urgencia ha sido sustituido por la necesidad de supervivencia que los ha llevado a anteponer sus esfuerzos para salvar su partido, al llamado histórico de encabezar como fuerza legislativa y como binomio presidencial, una convocatoria nacional para la concertación de un gran pacto político de cierre de la coyuntura de rotación de élites, que tiene sumergido al país en una crisis político-institucional crónica.

En este gobierno no se ha dado, ni entre los legisladores electos por el oficialismo, ni en el equipo del ejecutivo una voz rupturista que se atreva a proponer una hoja de ruta para las transformaciones profundas que tanto demanda la población. Ojo, no es una revolución ideológica que, desde los principios socialistas, ni mucho menos, se busque la consolidación de un nuevo pacto político

fundante, como es el pensamiento de los sectores radicales de izquierda que ven en la Asamblea Nacional Constituyente social y popular la vía para la refundación de Estado. Es tan solo reencausar el ideario de las movilizaciones del 2015 que pretenden un saneamiento de la cosa pública, principalmente de las mafias que han encontrado en los negocios con el Estado y la captura de la justicia, el mecanismo para procurarse impunidad y saquear el erario público.

Se entiende que los sectores conservadores quieran evitar que el descontento popular derive en una revolución desordenada y revanchista que dé al traste con los privilegios que han gozado desde la fundación del Estado. Por eso conviven con la revolución pasiva que encabeza el presidente Arévalo.

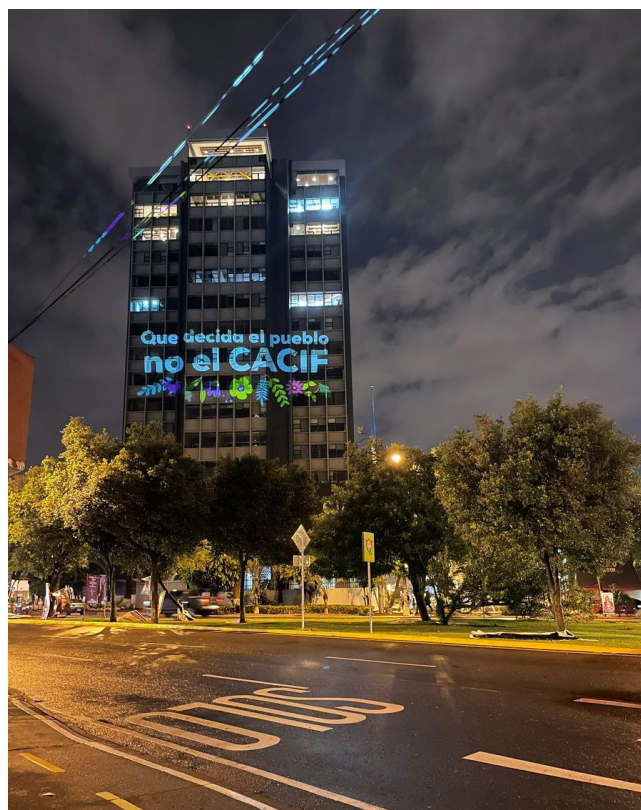
Esa connivencia se explica desde el planteamiento teórico de Gramsci: «En relación con los fenómenos de transformismo, Modonesi (2016) señala que elementos, grupos o sectores enteros de los movimientos populares fueron cooptados y absorbidos por fuerzas, alianzas y proyectos conservadores y, de manera específica, se desplazaron al terreno de la institucionalidad estatal en el marco de la implementación de políticas públicas orientadas a la redistribución. Estos desplazamientos estuvieron asociados a procesos de desmovilización y control social o, en algunos casos, de movilización controlada. La instalación de gobiernos progresistas produjo fenómenos de cooptación desde el aparato estatal que drenaron sectores y grupos importantes de los movimientos y organizaciones populares».

El autor Modonesi (2013) considera que «las transformaciones impulsadas por los gobiernos progresistas latinoamericanos pueden ser denominadas revoluciones —en un sentido acotado y centrado en los contenidos— por cuanto promovieron cambios significativos en sentido anti-neoliberal y pos-neoliberal», para el caso guatemalteco hoy en día no aplica. El presidente Arévalo se ha regodeado con los líderes progresistas de la región, pero su agenda de gobierno no contempla, ni de lejos, un planteamiento rupturista o que atente contra los privilegios del statu quo.

Gramsci introdujo la categoría transformismo para describir cómo las clases dominantes podían mantener su hegemonía mediante la aplicación de reformas limitadas y graduales que apaciguaran las demandas populares, pero que al mismo tiempo preservaran el orden establecido y vaciaran de contenido el imaginario de una ruptura radical con el pasado que les pueda afectar directamente. Es por eso que se pueden identificar fisuras en la «disciplina partidaria» que ha enfrentado a quienes esperaban una destitución inmediata de la Fiscal por parte del presidente y el camino legaloide que ha decidido recorrer con su facción, el grupo de abogados que además le ha gestado las derrotas mediáticas en todas las confrontaciones directas con la Fiscal General. Otro enfoque de contradicción interna es la visión de la facción joven del partido, que desde la campaña confrontó directamente a la organización patronal del país. Poco tiempo después se percataron que no se puede estabilizar el momento político y darle una resolución a la coyuntura abanderando la consigna

#UnFuturoSinCacif, porque este modelo corporativo de Estado llamado Guatemala, no se gobierna con partidos políticos, sino por medio de cuotas de poder que tienen actores y sectores estratégicos de país.

Lo hasta ahora visto en la gestión arevalista es que gobierna para las mismas clases dominantes, los mismos intereses de siempre, las mismas prioridades y el mismo estado de correlación de fuerzas histórico. Enfrenta la presión de sectores emergentes (nuevos ricos, lícitos e ilícitos) que pujan por sentarse a la mesa de los cabales en donde se repartían las mejores porciones del pastel. Esto explica en gran medida la pleitesía del sector tradicional de poder con la revolución pasiva del combate a la corrupción que sigue estéril después de una década de refriegas mediáticas y procesos judiciales, últimamente agilizados por la figura de aceptación de cargos.



Proyecciones de simpatizantes del Movimiento Semilla durante el periodo de campaña, en las instalaciones del edificio que alberga cámaras de las patronales guatemaltecas.

Las élites tradicionales contuvieron las visiones revanchistas que pretendían legalizar el combate a los monopolios, por lo que la Ley de Competencia no les representa amenazas al modelo económico de los últimos siglos. Además, obtuvieron una Ley de Infraestructura que abre el espacio para recuperar una porción del negocio de la infraestructura cooptado por los capitales emergentes. La «estabilización» de la variable política contribuye a elevar la evaluación de las calificadoras de riesgo que ven en ella la principal amenaza a los buenos indicadores macroeconómicos tan sólidos por décadas en el país. Todo iba bien hasta que, en el kilómetro 44 en la ruta CA-9 Sur, autopista Palín-Escuintla, se formó un socavón desde el 13 de junio de 2024. Después de más de 8 meses, el gobierno no termina de resolver el atascadero que ha desnudado su exigua capacidad ejecutiva.

Cómo afirmó Gramsci se está dando una recomposición estatal con apariencia de progreso, pero con los proyectos populares subordinados y sin capacidad de oposición real de los actores sociales que no tienen aún el valor de constituirse en interpelantes de un gobierno que aún consideran que representa mínimamente la posibilidad de atender sus demandas. Ni Codeca que tanto interpelló desde el primer momento al presidente Morales, ha hecho un posicionamiento de los tímidos avances del actual gobierno.

El combate a la corrupción fue un buen contenido para la propaganda electoral, pero no alcanza para consolidar una visión de país, ni un proyecto político y menos para constituir una política hegemónica. Es una narrativa eminentemente instrumental que convence a los sectores menos exigentes de gobernabilidad y efectividad del aparato gubernamental. Tampoco tiene capacidad de evitar el ascenso de las mafias como nuevo sujeto hegemónico que avanza en la cooptación gremial y sigue controlando los negocios con el Estado. Aún se reparte el erario nacional por medio del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural. Además, mantienen el control territorial a nivel político, rutas y hasta medios de fuerza y control social.

Restauración progresista

La energía social vislumbraba una posibilidad de cambio radical, una salida revolucionaria a la crisis política de 2015, pero se apostó a la democracia y el estado constitucional de derecho. Por accidente electoral llegó James Morales Cabrera que abanderó por intereses personales y de sus aliados políticos su única lucha visible enfrentar los señalamientos de corrupción. El principal resultado de su gestión fue la no renovación del acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y poco más que decir de esos cuatro años perdidos. Después, el triunfo electoral de Alejandro Giammattei fue una alerta de la restauración conservadora (véase el artículo «La restauración conservadora en tiempos de pandemia», RARN No. 33, 2020) que representaba el retorno de las élites tradicionales al poder, de la mano de un autócrata que, desde el primer día, gobernó centralizadamente un modelo que perfeccionó debido a las políticas sanitarias draconianas de combate al Covid-19. Esa tendencia la mantuvo durante todo el periodo de gobierno.

La restauración conservadora era la vuelta al modelo de gobierno de los años ochenta y noventa, en los que los intereses del sector empresarial dominaban la agenda pública. Pero la desmedida ambición del caudillo y la camarilla de avorazados e improvisados funcionarios públicos que se aprovecharon de los recursos de pandemia, condujo a que el sector tradicional de poder tomara distancia de un proyecto político que pretendía enquistarse en la administración pública. Los últimos aceptaron la llegada de un actor progresista, pero, en una cancha acotada y con múltiples camisas de fuerza, condiciones propiciatorias para que se instalara la restauración progresista. El cierre de una coyuntura puede derivar en una resolución revolucionaria o una restauración del viejo régimen con algunos énfasis. Esta última es la apuesta en el país luego de 2015 y a una década de los hechos, aunque no se logra definir el contenido del nuevo pacto político, la realidad sociopolítica del país demuestra que no hay condiciones para modificar substancialmente el régimen ni romper con los añejos privilegios.

La imagen política es la misma que hace 204 años, explicitada en el acta de independencia, que en su primera declaración plantea: *«Que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande publicar, para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo»*. De manera similar, ahora es mejor que se controle el rumbo del descontento social antes que la indignación derive en algo incontrolable para los poderes tradicionales.

La restauración progresista aspira a incorporar cambios significativos sin desestabilizar completamente el sistema político y social mediante políticas graduales que no alteren la *«estabilidad en el largo plazo»*, sin conflictos violentos y con reformas paulatinas que no parecieran afectar a nadie, excepto que el cáncer de la corrupción continúa drenando los recursos públicos para hacer de los aventureros de la política nuevos ricos, mientras la sociedad continúa subsistiendo con las mismas necesidades de siempre.

Arévalo debe estar consciente de que no hay ninguna probabilidad de reelección (consigna de los regímenes progres) ni de un sucesor. Quema sus naves al apostar a la inercia burocrático-institucional, es decir, a dar los resultados propios de la ejecución mecánica de los recursos y la *«talacha»* del día a día de la burocracia estatal. No aprovecha la sorpresa electoral para promover un proyecto histórico alternativo. Es claro que, en el estado actual de la partidocracia guatemalteca, entrar a la competencia electoral es la vía rápida para ser absorbido por el modelo tradicional de la política electorera que se divorcia de las clases populares durante el periodo de gobierno, pues pierden canales de intermediación con el Estado. Quedan entonces como los principales interlocutores, los sectores estratégicos de país que tienen sus cuotas de participación real en la institucionalidad del Estado por medio de las sillas que ocupan en los cuerpos colegiados de decisión. Es a estos a los que se les atiende desde el poder gubernamental.

Al no haber utopía, ni proyecto histórico alternativo, Arévalo reproduce el sistema. Hace a un lado las condiciones estructurales de los problemas históricos que han deteriorado la calidad de vida de los sectores desposeídos, vulnerables y excluidos que continúan en condiciones de indefensión y que sólo sirven para legalizar y legitimar formalmente, a través del voto, el poder público.

Solo así se entiende por qué el país no agarra tracción en ningún sentido y todos los sectores con poder de veto toleran que sigamos patinando en el mismo lugar. Mientras, los países vecinos avanzan a pasos agigantados hacia mejores niveles de vida digna de sus poblaciones y se vuelven socios más confiables para la inversión extranjera que sigue sin venir a Guatemala.

Señor presidente Cesar Bernardo Arévalo de León: ¿cuál es su utopía para nuestro país? ¿Quiénes son sus verdaderos aliados para concretarla y quiénes los oponentes a ella? Confundir al adversario es fórmula inequívoca del fracaso y seguir en la ruta de la restauración progre juega a favor de las clases dominantes que no saben hacer oposición, pues siempre han estado al frente del Estado o co-gobernando para defender lo que tienen que defender: sus capitales, intereses y el legado a sus descendientes.

Por otro lado, las izquierdas no saben hacer gobierno porque no se les permite en este país ascender a esas posiciones. Lo que Arévalo de León logró con el triunfo electoral lo está desperdiciando, porque las izquierdas aquí solo saben hacer oposición. Recién está aprendiendo a gobernar (lo dijo el presidente en su discurso sobre el informe del primer año en el Congreso). Gobierne con el pueblo, sobre todo con el que votó por usted y con los que aún tienen esperanza de que quiere hacer algo para cambiar Guatemala.

Portantiero (1977) escribe: *«es la propia categoría de pueblo la que debe ser construida en tanto voluntad colectiva. El pueblo no es un dato sino un sujeto que debe ser producido»*, orientado y guiado. Usted aún tiene el mando para hacerlo.

Referencias

Castillo, Cristhians. 2020. *La restauración conservadora en tiempos de pandemia*. Revista *Análisis de la Realidad Nacional*, año 9, edición 33 octubre diciembre 2020. Texto electrónico disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/12/IPN-RI-33-final.pdf>

La Hora (Redacción). 30 septiembre, 2023. *MP se lleva actas 4 y 8 que resguardan pureza del proceso electoral*. *Vespertino La Hora*. Artículo electrónico disponible en: *MP se lleva actas 4 y 8 que resguardan pureza del proceso electoral - La Hora*

Modonesi, M. (2013). *Revoluciones pasivas en América Latina. Una aproximación gramsciana a la caracterización de los gobiernos progresistas de inicio de siglo*. Id. (comp.). *Horizontes gramscianos. Estudios en torno al pensamiento de Antonio Gramsci*, Mexico, UNAM.

Modonesi, M. y Svampa. (2016). *Posprogresismo y horizontes emancipatorios en América Latina*. *La Izquierda Diario*, 10 de agosto.

Portantiero, J C. (1977). «Los usos de Gramsci», en *Antonio Gramsci, Escritos Políticos (1917-1933)*, Cuadernos de Pasado y Presente, No. 54, México: Pasado y Presente.

Quevedo, Ch. (2019). *Revoluciones pasivas, cesarismo y transformismo. El ciclo progresista latinoamericano y las categorías de Gramsci*. En *GRAMSCI La teoría de la hegemonía y las transformaciones políticas recientes en América Latina*. Actas del Simposio Internacional Asunción, 2019, primera edición, Asunción: Centro de Estudios Germinal.

Ramírez, I. 20 de junio de 2015. *Pensamiento político: de Platón a Juan José Arévalo*. *Prensa Libre*, hemeroteca. Artículo electrónico disponible en: <https://www.prensalibre.com/hemeroteca/pensamiento-politico-de-platon-a-juan-jose-arevalo/>